



GACETA DEL CONGRESO

SENADO Y CAMARA

(Artículo 36, Ley 5a. de 1992)

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
www.imprenta.gov.co

ISSN 0123-9066

AÑO XIV - Nº 377

Bogotá, D. C., jueves 16 de junio de 2005

EDICION DE 16 PAGINAS

DIRECTORES:

EMILIO RAMON OTERO DAJUD
SECRETARIO GENERAL DEL SENADO
www.secretariassenado.gov.co

ANGELINO LIZCANO RIVERA
SECRETARIO GENERAL DE LA CAMARA
www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PUBLICO

CAMARA DE REPRESENTANTES

PONENCIAS

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO NUMERO 347 DE 2005 CAMARA

por medio del cual se adiciona el artículo 258 de la Constitución Política de Colombia.

Bogotá, D. C., junio 1º de 2005

Doctor

HERNANDO TORRES BARRERA

Presidente

Comisión Primera Constitucional

Cámara de Representantes

Ciudad

Respetado señor Presidente:

Con la presente de manera respetuosa y como depositarios del encargo reglamentario de la ponencia con la cual se inicia el debate del Proyecto de Acto legislativo número 347 de 2005 Cámara, *por medio del cual se adiciona el artículo 258 de la Constitución Política de Colombia*, sometemos por su conducto al estudio de la Comisión Primera Constitucional de la honorable Cámara de Representantes la ponencia para primer debate de esta iniciativa presentada por los Representantes Venus Albeiro Silva, Alexánder López Maya, Erminsul Sinisterra, María Isabel Urrutia, Wilson Borja; Senadores Jorge Enrique Robledo, Luis Carlos Avellaneda, Jesús Bernal Amorocho y otros.

Contenido de la ponencia

El presente proyecto de acto legislativo responde a una nueva realidad que se muestra con la entrada en vigencia del Acto legislativo 01 de 2003 Reforma Política, mediante el cual se tratan de transformar las costumbres y prácticas políticas colombianas.

El objeto de la propuesta es que se instaure la obligación de la fotografía del candidato junto a sus nombres y apellidos completos, sin importar su aspiración a Corporación Pública o Cargo Unipersonal.

Los efectos materiales de dicha normatividad respecto a la actividad electoral, que se dio en las pasadas elecciones de octubre de 2003 resultaron en algunos aspectos nefastos, por cuanto fue una constante que aparecieran una infinidad de votos nulos por el mal diligenciamiento

de los electores al momento de realizar su votación, o como sucedió en la mayoría de veces, aparecieron gran cantidad de votos a favor de los partidos y movimientos políticos, pero que a su vez no apoyaban a ningún candidato en particular.

Este fenómeno es un reflejo a la falta de educación electoral de los ciudadanos, por cuanto con la entrada en vigencia de estas nuevas reglas de juego, los ciudadanos salieron a apoyar a partidos políticos supuestamente fuertes, más que a personas individualmente consideradas, pero dicho suceso a lo contrario de lo que se cree, fue un retroceso en la democracia participativa del país, con la decisión de las autoridades electorales de suprimir la fotografía de los candidatos que aspiraban a Corporaciones Públicas, en las tarjetas electorales, con lo cual, la población menos favorecida, menos experta y poco conocedora de estos aspectos –además por el poco tiempo de entrada en vigencia de esta normatividad– tuvo que resignarse a votar únicamente por los emblemas de los partidos con lo cual apoyó a medias al candidato de su predilección, o por el contrario, en su afán de participar activamente, señaló de forma errónea el tarjetón con lo cual se anuló el voto.

Si bien en Colombia se han dado pasos agigantados para que la participación ciudadana tenga una incidencia real al momento de las elecciones y que la voz de las comunidades tengan efectividad con respecto a la forma como se conforman las diferentes corporaciones del Estado colombiano, no podemos de ninguna forma flaquear en la intención de ampliar y dar mejores opciones a los espacios electorales para así poder conformar una democracia real.

Es por esto, que la opinión de los ponentes es que la propuesta que se estudia se acomoda a la técnica constitucional, por cuanto resultaría muy acertado aceptar dicha adición ya que se le brinda a la ciudadanía colombiana, las herramientas necesarias y suficientes para que tengan la certeza absoluta de quién es la persona por la cual realmente quieren votar, y además de que se otorga la opción visual al estar presente la respectiva fotografía del candidato junto a sus nombres y apellidos completos en la tarjeta electoral, a aquella población como la tercera edad, jóvenes, analfabetas y demás personas que por una u otra razón no han recibido una instrucción escolar adecuada o simplemente nunca la han recibido.

Además, otro de los argumentos de los ponentes para avalar este proyecto, es que se encuentra acertada la redacción propuesta en el Proyecto de Acto legislativo número 347 de 2005 Cámara, según el cual, en efecto, se hace necesario que sea el propio texto constitucional el que delimite con precisión el alcance del voto como derecho y como deber ciudadano.

Proposición

Por las anteriores consideraciones, nos permitimos solicitar a los honorables miembros de la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes dar primer debate al Proyecto de Acto legislativo número 347 de 2005 Cámara, *por medio del cual se adiciona el artículo 258 de la Constitución Política de Colombia*, con el mismo texto presentado en el proyecto original.

Muy cordialmente,

Jorge Luis Caballero C., Ponente Coordinador; *Rosmery Martínez Rosales*, Ponente.

TEXTO PROPUESTO PARA SER APROBADO EN PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NUMERO 347 DE 2005 CAMARA

por medio de la cual se adiciona el artículo 258 de la Constitución Política de Colombia.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónese el artículo 258 de la Constitución Política de Colombia, el cual queda así:

Artículo 258. *El voto es un derecho y un deber ciudadano.* El Estado velará porque se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación, sin perjuicio del uso de medios electrónicos e informáticos. En las elecciones de candidatos podrán emplearse tarjetas electorales numeradas e impresas en papel que ofrezca seguridad, las cuales serán distribuidas oficialmente. La Organización Electoral suministrará igualmente a los votantes instrumentos en los cuales deben aparecer identificados con claridad y en iguales condiciones los movimientos y partidos políticos con personería jurídica y los candidatos. La ley podrá implantar mecanismos de votación que otorguen más y mejores garantías para el libre ejercicio de este derecho de los ciudadanos, por lo cual, sin distinción del sistema que se emplee y la cantidad de listas o candidatos que se presenten para la respectiva elección, siempre ha de estar presente la respectiva fotografía del candidato junto a sus nombres y apellidos completos.

Parágrafo 1°. Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una Corporación Pública, Gobernador o Alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando los votos en blanco constituyan mayoría absoluta en relación con los votos válidos. Tratándose de elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras que en las Corporaciones Públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral.

Parágrafo 2°. Se podrá implementar el voto electrónico para lograr agilidad y transparencia en todas las votaciones. Con el fin de hacer mayor claridad en la identidad de los candidatos, siempre ha de estar presente la respectiva fotografía junto a sus nombres y apellidos completos, con independencia de la cantidad de candidatos que se presenten en la respectiva elección.

Artículo 2°. Este acto legislativo rige a partir de su fecha de promulgación.

Muy cordialmente,

Jorge Luis Caballero C., Ponente Coordinador; *Rosmery Martínez Rosales*, Ponente.

INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY NUMERO 192 DE 2004 CAMARA

por medio de la cual se autoriza y reglamenta la actividad de la helicultura y se dictan otras disposiciones.

Bogotá, D. C., junio 13 de 2005

Doctor

JOSE MARIA IMBETT

Presidente

Comisión Quinta

Cámara de Representantes

Bogotá, D. C.

Referencia: Proyecto de ley número 192 de 2004 Cámara, *por medio de la cual se autoriza y reglamenta la actividad de la helicultura y se dictan otras disposiciones.*

Señor Presidente:

En cumplimiento de la designación que usted nos hiciera procedemos a continuación a rendir informe de ponencia sobre el proyecto de ley de la referencia, en los siguientes términos:

Antecedentes legislativos

En la actualidad no existe en el país una reglamentación que se refiera específicamente a los zocriaderos de caracol terrestre, es decir, es una actividad que no se encuentra expresamente regulada. Sin embargo, la normatividad nacional contiene algunas directrices que sirven como antecedentes para el presente proyecto, para efectos de lo cual las relacionamos a continuación, en orden cronológico:

Decreto número 1608 del 31 de julio de 1978

Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente en materia de fauna silvestre.

Esta norma define en su artículo 138 que la introducción de especies de la fauna silvestre, es todo acto que conduzca al establecimiento o implantación en el país, bien sea en medios naturales o artificiales, de especies o subespecies exóticas de la fauna silvestre. Además, expresa que se entiende por exótica la especie o subespecie taxonómica, raza o variedad cuya área natural de dispersión geográfica no se extiende al territorio nacional ni a aguas jurisdiccionales y si se encuentra en el país es como resultado voluntario o involuntario de la actividad humana.

Los artículos 142 a 155 de este decreto contienen la reglamentación relacionada con los zocriaderos, en la cual se establece expresamente que cuando se pretenda criar en ellos una especie exótica de fauna silvestre no existente en el país, será necesario que el interesado trámite previamente la autorización del Gobierno Nacional.

Ley 99 de 1993, artículo 52, numeral 12:

“**Competencia del Ministerio de Medio Ambiente.** El Ministerio de Medio Ambiente otorgará de manera privativa la licencia ambiental en los siguientes casos:

... 12. Introducción al país de parentales para la reproducción de especies foráneas de fauna y flora silvestre que puedan afectar la estabilidad de los ecosistemas o de la vida salvaje”.

Ley 611 de agosto 17 de 2000, por la cual se dictan normas para el manejo sostenible de especies de fauna silvestre y acuática. Contiene la normatividad sobre el establecimiento y funcionamiento de zocriaderos en el país.

Resolución número 1317 de 2000, que reglamenta la caza de fomento y el establecimiento de zocriaderos.

Decreto 1180 de 2003, artículo 8°, numeral 16:

“**Competencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.** El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial otorgará de manera privativa la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades:

... 16. La introducción al país de parentales, especies, subespecies, razas o variedades silvestres foráneas con fines de reproducción para establecerse o implantarse en medios naturales o artificiales, que puedan afectar la estabilidad de los ecosistemas o de la vida silvestre. La licencia ambiental contemplará las actividades de importación, investigación, introducción y el establecimiento de zocriaderos.

Como consecuencia de lo anterior y teniendo en cuenta que la especie de caracol Hélix Aspersa, que es la que está siendo criada para su comercialización, fue introducida ilegalmente al país hacia 1974, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial puede exigir a los zocriaderos en donde se cultiva, la respectiva **Licencia Ambiental** y, ante su inexistencia, imponer medidas sancionatorias que incluyen el cierre de los establecimientos dedicados a esta actividad. Por ello, se hace necesario dictar una norma que regule esta actividad, exigiendo el cumplimiento de algunas medidas tendientes a preservar el medio ambiente y la salud pública.

Impacto ambiental de los caracoles

Los caracoles, al igual que todo ser vivo producen un impacto ambiental específico en el nicho ecológico o ecosistema al cual se adaptan para desarrollar sus actividades vitales (alimentación, reproducción, locomoción, diseminación, etc.) y además abrirse un espacio en la cadena alimenticia, en la cual son considerados animales presa; es decir, que sirven de alimento a otras especies animales que son omnívoras y/o carnívoras abarcando varias categorías taxonómicas, desde invertebrados e insecto; hasta aves, anfibios y reptiles.

El principal impacto de los caracoles recae sobre las plantas verdes ya que son fitófagos y de manera preferente sobre la vegetación rasante o herbácea por lo que se encuentran asociados a cultivos comerciales de hortalizas, verduras, aromáticas, jardines, cultivos de plantas ornamentales y cultivos de pan coger, etc. Si determinamos los orígenes de estas variedades vegetales, muchas fueron introducidas al país y al igual que los caracoles son especies exóticas. Algunos estudios preliminares muestran que los caracoles del género Hélix, no se encuentran distribuidos en zonas de humedales, rondas de quebradas y bosque nativo en formación o establecido. Dichas observaciones se han realizado en los humedales de Juan Amarillo, Córdoba, Santa María de Lago, Laguna La Herrera en Mosquera y en las reservas forestales de La Conejera en Suba, Cerros Orientales de Bogotá, Reserva Ecológica en Cota, entre otras. Igualmente, no se observan en los páramos cercanos a la capital, ni en zonas de parques naturales.

Una razón por la cual los caracoles no se adaptan a ecosistemas nativos es la gran cantidad de depredadores presentes en estas zonas, lo cual explica porqué en los cultivos comerciales prosperan, ya que en estos se hace un control de plagas con agroquímicos, que disminuye notablemente la presencia de dichos depredadores y competidores, permitiendo un aumento exponencial de su población.

Los caracoles del género Hélix no son vectores de parásitos que afecten al ser humano; se ha reportado en algunos casos la presencia de *Ascaris lumbricoides*, pero asociada a aguas de riego contaminadas por la cría de cerdos cerca de helicultivos en la sabana de Bogotá.

El mayor impacto ambiental es de origen antrópico, producido por la necesidad de controlar los caracoles en los cultivos comerciales, lo que determina en el uso indiscriminado de agroquímicos que contaminan el agua, el suelo, las hortalizas, verduras y cultivos de pan coger. Dichos alimentos son consumidos en las ciudades, ocasionando así graves problemas de salubridad pública resultando en perjuicios mayores.

En la medida que se explotan comercialmente las especies exóticas de caracoles presentes en el país, se reduce el impacto ambiental causado por su agresiva colonización de los ecosistemas, así las autoridades ambientales pueden ejercer un efectivo control que hasta ahora no ha ocurrido.

La única forma de controlar los caracoles de manera efectiva y reducir su impacto ambiental, es permitiendo su comercialización y el

aprovechamiento de sus bondades, lo que puede fácilmente redimir municipios enteros al explotar racionalmente estas especies ya establecidas en el país. Tenemos la obligación de aprovechar esta fortaleza, razón por la cual vemos conveniente y oportuna la aprobación de este proyecto de ley.

Estadísticas sobre helicultura en el país

A pesar de que no existen en el país cifras oficiales sobre esta actividad, hemos recogido entre los helicultores la siguiente información:

– Departamentos donde encontramos caracoles y se han instalado helicultivos:

Antioquia, Boyacá, Caldas, Casanare, Cundinamarca, Meta, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

– Helicultores (cultivadores de caracol):

10.800 en todo el país, aproximadamente. Estos ejercen las actividades de manera incipiente o las han suspendido temporalmente, a la espera de que los Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de Agricultura definan el nuevo marco ambiental, jurídico y técnico de este renglón pecuario o el Congreso expida una ley en este sentido.

– Extensión de los cultivos:

Los cultivos en su gran mayoría no superan los 10.000 ejemplares, lo cual corresponde a 20 metros cuadrados de extensión de tierra.

– Capacitación:

En los últimos 5 años se han capacitado 18.000 personas, aproximadamente. Para ello se han constituido legalmente asociaciones de helicultores, que promueven esta actividad

– Asociaciones de helicultores y afines:

Asocohélix, Copohélix, Asopec, Induagrocol, Intragrocol, Cofederacol, Funcolsa, Dheliexport de Colombia Ltda., Cohecol, Anayacoly.

– Producción estimada y proyectada:

En la actualidad se producen 20 toneladas mensuales, que no pueden ser comercializadas bajo las normas ambientales vigentes. Se estima una producción de 350 toneladas, en el siguiente semestre de reformada la normatividad actual y se pretende llegar a una producción de 2.000 toneladas anuales a partir de 2007.

– Ingresos esperados:

Cada tonelada de caracol comercializada genera los siguientes ingresos por sector (pesos de 2004):

| | |
|-----------------|-----------|
| Productor | 4.000.000 |
| Transformador | 2.000.000 |
| Comercializador | 3.000.000 |
| Exportador | 3.500.000 |

– Generación de empleo

| | |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Empleos directos producción por tonelada | 3 |
| Empleos directos e indirectos por tonelada transformada | 12 |
| Total empleos generados por tonelada producida | 15 |

– La helicultura es un nuevo renglón pecuario que puede generar entre 4.000 y 5.000 empleos directos y 3.000 indirectos, una vez consolidado el sector; teniendo en cuenta las proyecciones del mercado para exportación que sobrepasa las 2.000 toneladas y el incremento del consumo interno que en la actualidad alcanza los U\$800.000 (ochocientos mil dólares) al año. Estas cifras justifican la creación de la cadena productiva del caracol, con el apoyo de Minagricultura.

Proposición

Con base en el presente informe proponemos a la plenaria de la Cámara de Representantes darle segundo debate al Proyecto de ley número 192 de 2004 Cámara, *por medio de la cual se autoriza y*

reglamenta la actividad de la helicultura y se dictan otras disposiciones, con el texto aprobado en primer debate en la Comisión Quinta de la Corporación, el cual es como sigue:

PROYECTO DE LEY 192 DE 2004 CAMARA

por medio de la cual se autoriza y reglamenta la actividad de la helicultura y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. La presente ley tiene por objeto autorizar la explotación del caracol terrestre del género *Hélix* y sus diferentes especies, y reglamentar la actividad de la helicultura, preservando el medio ambiente y garantizando la salubridad pública. Para estos efectos se tendrán en cuenta las actividades relacionadas con el establecimiento de zocriaderos, a partir de la recolección y selección de caracol terrestre del género *Hélix*, de los ejemplares establecidos y adaptados en las diferentes regiones del país.

Artículo 2°. *Zonas de Vocación Helicícola*. Denomínanse Zonas de Vocación helicícola las regiones del país donde se encuentran los caracoles terrestres del género *Hélix*. A partir de esta ley, dichas regiones quedan declaradas como zonas aptas para el cultivo de este género de caracol y en ellas se permitirá la explotación de la actividad helicícola, atendiendo las instrucciones que sobre manejo ambiental definan las respectivas autoridades.

Artículo 3°. *Política ambiental*. Todo zocriadero de caracol terrestre del género *Hélix* que funcione en el país debe establecer y mantener un Sistema de Administración Ambiental apropiado para la escala e impacto ambiental que genere el proceso zocria sobre los recursos naturales y que cumpla como mínimo con los siguientes requisitos:

a) Incluir compromisos de mejoramiento continuo, prevención de la contaminación y cumplimiento de la legislación y regulaciones vigentes;

b) Contener el marco operativo del programa regional, para ejecutar y revisar los objetivos y las metas ambientales;

c) Establecer un sistema de documentación de principios y procesos, que sean conocidos y practicados por todas las personas involucradas, asignando responsabilidades a cada uno;

d) Establecer unos objetivos y metas ambientales para medir la magnitud del impacto, que genera la actividad de zocria, en términos de:

- Severidad del impacto (magnitud del daño).
- Probabilidad de ocurrencia (riesgo).
- Permanencia del impacto (duración en el tiempo).

Artículo 4°. *Plan de Manejo Ambiental*. Además del Sistema de Administración Ambiental, los zocriaderos de caracol terrestre del género *Hélix* deben disponer de los siguientes instrumentos para el manejo administrativo ambiental de sus procesos:

a) Memorias técnicas, diseños y planos de las instalaciones del zocriadero;

b) Diagrama de flujo del proceso;

c) Manual de operación y mantenimiento de equipos utilizados;

d) Cronograma de actividades diarias, semanales, mensuales y anuales;

e) Manejo y disposición final de subproductos de la zocria;

f) Plan de manejo paisajístico y de repoblación vegetal;

g) Plan de educación continua.

Artículo 5°. *Verificación*. La autoridad ambiental respectiva podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley.

Artículo 6°. El Gobierno Nacional reglamentará todo lo relacionado con insumos, recolección, cultivo, transporte, procesamiento,

comercialización, importación y exportación del caracol terrestre del género *Hélix*.

Artículo 7°. *Vigencia*. La presente ley rige a partir de su promulgación.

Los Ponentes,

Luis Enrique Dussán López, Luis Edmundo Maya Ponce, Representantes a la Cámara. Ponentes.

* * *

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE EN LA COMISION SEXTA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES DEL PROYECTO DE LEY NUMERO 342 DE 2005 CAMARA

por la cual se modifica el artículo 14 de la Ley 115 de 1994.

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el literal d) del artículo 14 de la Ley 115 de 1994, el cual quedará así:

d) “La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, la urbanidad, el cooperativismo y en general la formación de los valores humanos, y

Artículo 2°. El Gobierno Nacional reglamentará lo pertinente para el cabal cumplimiento de la presente ley en un término no mayor a 90 días.

Artículo 3°. *Vigencia*. La presente ley rige a partir de su sanción y promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

En los términos anteriores fue aprobado el Proyecto de ley número 342 de 2005 Cámara, *por la cual se modifica el artículo 14 de la Ley 115 de 1994*, según consta en el Acta número 029 del 8 de junio de 2005.

El Presidente,

Plinio Edilberto Olano Becerra.

El Secretario,

Carlos Oyaga Quiroz.

INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE LEY NUMERO 342 DE 2005 CAMARA

por la cual se modifica el artículo 14 de la Ley 115 de 1994.

Bogotá, D. C., 14 de junio de 2005

Doctor

PLINIO EDILBERTO OLANO BECERRA

Presidente de la Comisión Sexta Constitucional Permanente

Honorable Cámara de Representantes

Ciudad.

Señor Presidente:

De acuerdo a lo establecido en la Ley 5ª de 1992, y por su digno conducto presentamos a la plenaria de la Corporación, la ponencia para segundo debate al Proyecto de ley número 342 de 2005 Cámara, *por la cual se modifica el artículo 14 de la Ley 115 de 1994*, en los siguientes términos:

1. Iniciativa, contenido y objetivo principal del proyecto

La iniciativa legislativa en referencia, presentada por la honorable Representante Rosmery Martínez Rosales, constaba de tres artículos incluyendo el de vigencia y buscaba como objetivo principal la creación de la Cátedra de Urbanidad y Cívica.

2. Primer debate en Comisión Sexta

Los honorables Representantes integrantes de la Comisión Sexta, acogieron en primer debate los planteamientos expresados por el Ministerio de Educación Nacional, de no incluir por ley cátedras que puedan incidir en la flexibilización del Programa Educativo Institucional, PEI, salvando la inclusión de la urbanidad en los contenidos establecidos en el artículo 14 de la Ley 115 de 1994.

3. Texto aprobado en la Comisión Sexta

PROYECTO DE LEY NUMERO 342 DE 2005 CAMARA
por la cual se modifica el artículo 14 de la Ley 115 de 1994.

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el literal d) del artículo 14 de la Ley 115 de 1994, el cual quedará así:

d) “La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, la urbanidad, el cooperativismo y en general la formación de los valores humanos, y

Artículo 2°. El Gobierno Nacional reglamentará lo pertinente para el cabal cumplimiento de la presente ley en un término no mayor a 90 días.

Artículo 3°. *Vigencia.* La presente ley rige a partir de su sanción y promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

En los términos anteriores fue aprobado el Proyecto de ley número 342 de 2005 Cámara, por la cual se modifica el artículo 14 de la Ley 115 de 1994, según consta en el Acta número 029 del 8 de junio de 2005.

4. Marco constitucional

La Carta Política de 1991 en su artículo 41 constituyó la obligación de impartir en las instituciones de educación, el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica, encontrándose ello dentro de nuestros derechos fundamentales; por tal circunstancia y existiendo la legislación pertinente al estudio de la Constitución Política Ley 107 de 1994, *por la cual se reglamenta el artículo 41 de la Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones*, considero que el legislador se quedó corto en el tratamiento de la **instrucción cívica y los contenidos en urbanidad**, lo que hace necesario que se genere una ley que clarifique la necesidad de que esta cátedra sea dictada en todos los cursos desde el preescolar, la educación básica primaria y secundaria, así como en la educación media y que obligue a que la misma sea adoptada no como algo transitorio, sino como parte integrante del currículo académico. Esto sin olvidar que la urbanidad era un contenido obligatorio hasta hace unos años en Colombia.

Individualmente, su utilidad en búsqueda de la Paz Nacional no tiene límites, por lo cual todo ciudadano colombiano debe tener la oportunidad de recibir información en esta área para así contribuir con este proyecto nacional.

“Debemos estar convencidos de que la educación es uno de los caminos que hará posible la paz, si abrimos las puertas de todas las escuelas y colegios a los niños y niñas colombianos, brindándoles educación de calidad, estaremos no-solo alejándolos de la pobreza sino también, dándoles la oportunidad de vivir y construir un país en paz...” esto ha sido manifestado por el Gobierno Nacional definiendo que la primera de sus herramientas de equidad social es la **Revolución Educativa**.

Ha visto también el Gobierno, la necesidad de formar para la ciudadanía, por ello se viene trabajando en el desarrollo de **competencias ciudadanas** lo que conlleva a tomar la decisión de construir democracia en el país, formando ciudadanos comprometidos, respetuosos de las diferencias y defensores del bien común.

Todo ello se construye a través de la educación en urbanidad y cívica, principios básicos del ser humano.

El presente proyecto de ley está enmarcado en el bloque de constitucionalidad consignado en el artículo 3°, destacando que su columna vertebral son los artículos 67 y 41 de la Constitución Política, en concordancia con el preámbulo de la misma y los artículos 1°, 2° (inciso 2°), 4° (inciso 1°), 5°, 6°, 13, (inciso 1°), 40 (numerales 5 y 6), 44, 45, 46, 68, 86, 91, 95 (numeral 5), 96, 103, 188, 222, 241, 271 (numerales 1 y 2) y 282 (numeral 2).

5. Justificación del proyecto

Para la autora, motiva la iniciativa del presente proyecto de ley la vistosa necesidad de inculcar en los niños unas normas mínimas de comportamiento en comunidad, para lo que es necesario el estudio de la cátedra de urbanidad y cívica.

A pesar de tener tanta importancia, la urbanidad y la cívica se han venido perdiendo, y las nuevas generaciones cada vez saben menos acerca de cómo comportarse en su entorno social. Esto se expande como una enfermedad moral, que hace permisible los actos insolentes, que son alabados en los falsos ídolos que las proyectan.

Y ¿por qué es tan importante que desde los centros educativos se imparta esta cátedra de Urbanidad y Cívica? Porque lastimosamente, los padres ya no tienen la oportunidad de compartir el tiempo necesario con sus hijos, lo que mucho menos les permite inculcar los valores que en este sentido requieren, los tiempos han cambiado y los padres ahora no son quienes dan el ejemplo a sus hijos, por el contrario, los niños están creciendo con lo que aprenden desde sus jardines y colegios; por ello, si en estos frentes educativos no reciben la información necesaria, van a ser hombres sin un buen comportamiento, que seguramente les afectará en su vida adulta.

Y no solo las conductas de comportamiento son abarcadas por el campo de la urbanidad y la cívica, sino también el conjunto de deberes que los individuos tenemos con la Patria, con Dios, con la familia, con nuestros semejantes y con nosotros mismos.

En consecuencia conocer la urbanidad nos permite darle un horizonte a nuestra vida en pro de un mejor vivir para todos, así como el afianzamiento de los valores humanos.

6. Proposición

Por las anteriores consideraciones, proponemos a los honorables integrantes de la Cámara de Representantes, dar segundo debate al Proyecto de ley número 342 de 2005 Cámara, *por la cual se modifica el artículo 14 de la Ley 115 de 1994*, junto con el pliego de modificaciones propuesto.

Rocío Arias Hoyos, Representante a la Cámara por el departamento de Antioquia; *Jhon Jairo Velásquez Cárdenas*, Representante a la Cámara por el departamento de Risaralda; *Pedro María Ramírez*, Representante a la Cámara por el departamento de Cundinamarca.

PLIEGO DE MODIFICACIONES AL PROYECTO DE LEY NUMERO 342 DE 2005 CAMARA

por la cual se modifica el artículo 14 de la Ley 115 de 1994.

El Proyecto de ley número 342 de 2005 Cámara, *por la cual se modifica el artículo 14 de la Ley 115 de 1994*, quedará así:

Proyecto de ley número 342 de 2005 Cámara, por la cual se adiciona la urbanidad como contenido de la enseñanza obligatoria establecida en el artículo 14 de la Ley 115 de 1994.

El artículo 1°. Quedará así:

Artículo 1°. El literal d) del artículo 14 de la Ley 115 de 1994, quedará así:

d) “La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, **la urbanidad**, el cooperativismo y en general la formación de los valores humanos, y

Al incluir una definición de urbanidad, se agrega un artículo que debe ser el artículo segundo y que dirá:

Artículo 2°. Urbanidad. Debe entenderse por urbanidad, todas aquellas orientaciones sencillas acerca del comportamiento humano que tienen como fin mejorar la convivencia social.

El artículo 2° que queda igual, pasará a ser el **tercero**.

El artículo 3° que queda igual, pasará a ser el **cuarto**.

Rocío Arias Hoyos, Representante a la Cámara por el departamento de Antioquia; *Jhon Jairo Velásquez Cárdenas*, Representante a la Cámara por el departamento de Risaralda; *Pedro María Ramírez*, Representante a la Cámara por el departamento de Cundinamarca.

**TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NUMERO 342 DE 2005 CAMARA**

por la cual se adiciona la urbanidad como contenido de la enseñanza obligatoria establecida el artículo 14 de la Ley 115 de 1994.

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. El literal d) del artículo 14 de la Ley 115 de 1994, quedará así:

d) “La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, la **urbanidad**, el cooperativismo y en general la formación de los valores humanos, y

Artículo 2°. *Urbanidad*. Debe entenderse por urbanidad todas aquellas orientaciones sencillas acerca del comportamiento humano que tienen como fin mejorar la convivencia social.

Artículo 3°. El Gobierno Nacional reglamentará lo pertinente para el cabal cumplimiento de la presente ley en un término no mayor a 90 días.

Artículo 4°. *Vigencia*. La presente ley rige a partir de su sanción y promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

De los honorables Congresistas,

Rocío Arias Hoyos, Representante a la Cámara por el departamento de Antioquia; *Jhon Jairo Velásquez Cárdenas*, Representante a la Cámara por el departamento de Risaralda; *Pedro María Ramírez*, Representante a la Cámara por el departamento de Cundinamarca.

CAMARA DE REPRESENTANTES

COMISION SEXTA CONSTITUCIONAL PERMANENTE

SUSTANCIACION INFORME DE PONENCIA PARA
SEGUNDO DEBATE

Bogotá, D. C., junio 14 de 2005

Autorizamos el presente informe de ponencia para segundo debate al Proyecto de ley número 342 de 2005 Cámara, *por la cual se modifica el artículo 14 de la Ley 115 de 1994*, presentado por los honorables Representantes *Rocío Arias Hoyos*, *Pedro María Ramírez* y *Jhon Jairo Velásquez Cárdenas*.

El Presidente,

Plinio Edilberto Olano Becerra.

El Secretario,

Carlos Oyaga Quiroz.

ARTICULADOS APROBADOS EN COMISION

**ARTICULADO APROBADO EN SESION DE LA COMISION
QUINTA DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES**

Junio 15 de 2005

PROYECTO DE LEY NUMERO 365 DE 2005 CAMARA

por la cual se establecen medidas para orientar la planificación y administración del recurso hídrico en el territorio nacional.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

CAPITULO I

Normas generales, instituciones y planificación

Artículo 1°. *Objeto*. La presente ley establece el conjunto de principios, criterios y directrices que deben desarrollarse al interior del Sistema Nacional Ambiental, para orientar la planificación y administración del recurso hídrico, con el fin de asegurar su disponibilidad presente y futura, en cantidad y calidad adecuadas, como elemento estratégico para el desarrollo sostenible de la Nación.

La planificación del recurso hídrico corresponde al conjunto ordenado de acciones y medidas orientadas a la administración y manejo del agua, en cualquiera de sus estados y formas, y de su interrelación con los demás recursos naturales renovables y elementos del ambiente.

Artículo 2°. *Principios*. Además de los principios generales ambientales señalados en el Decreto 2811 de 1974 –Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente– y en el artículo 1° de la Ley 99 de 1993, en tanto sean acordes con lo previsto en la presente ley, la planificación y administración del recurso hídrico se desarrollará con sujeción a los siguientes principios básicos:

2.1 Importancia estratégica del agua. El agua es base para la vida, contribuye al mantenimiento y funcionamiento de los ecosistemas, a la salud, al bienestar y a la seguridad alimentaria de las comunidades y al desarrollo económico, social y cultural del país. Por lo tanto, se propenderá por la conservación, renovabilidad, uso y manejo de los elementos del sistema hídrico en el marco del concepto del desarrollo sostenible.

2.2 Eficiencia. Se debe buscar la racionalidad en su asignación y uso, de manera que los beneficios socioeconómicos y ambientales derivados de las políticas e inversiones públicas y privadas que se desarrollen sean siempre superiores a sus costos.

2.3 Unidad de planificación y administración. Se reconoce la cuenca hidrográfica como la unidad fundamental para la planificación y administración del recurso hídrico.

2.4 Solidaridad de cuenca. Las inversiones y costos derivados de las acciones y medidas que para el efecto se definan en el plan de ordenación y manejo de una cuenca hidrográfica común, serán asumidos solidariamente por las autoridades ambientales competentes con jurisdicción en dicha cuenca, independiente de su área de jurisdicción, con cargo a los recursos financieros provenientes de la aplicación, al interior de dicha cuenca, de los instrumentos económicos y financieros a que hace referencia el Capítulo VIII de la presente ley, respetando siempre la naturaleza jurídica y la destinación específica establecida para los mismos. En todo caso las inversiones y gastos deben definirse de acuerdo con un orden de prioridad sustentado en argumentos técnicos.

Artículo 3°. *Comité Técnico Intersectorial para la Planificación del Recurso Hídrico*. El Consejo Nacional Ambiental contará con un Comité Técnico Intersectorial para la Planificación del Recurso Hídrico, con el objeto de cumplir con las siguientes funciones:

1. Dar concepto sobre el Plan Hídrico Nacional y recomendar su actualización periódica y revisión, previa justificación técnica.

2. Proponer criterios, directrices y lineamientos para la regulación en materia del recurso hídrico.

3. Revisar y dar recomendaciones sobre los planes y programas sectoriales en cuanto afecten la planificación hídrica.

4. Recomendar a las entidades del sector público y privado el desarrollo de investigaciones orientadas a la exploración, conservación, recuperación, uso y manejo sostenible del recurso hídrico y sus ecosistemas asociados.

5. Las demás que le asigne el Consejo Nacional Ambiental.

Artículo 4°. *Instrumentos de planificación*. Son instrumentos de soporte para la planificación y administración del recurso hídrico, los siguientes:

1. El Plan Hídrico Nacional.

2. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica.

Los planes y programas y agendas sectoriales que tengan injerencia directa o indirecta en la conservación, preservación, uso y aprovechamiento del recurso hídrico, así como los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios y distritos, y los Planes de

Desarrollo de los municipios, distritos y departamentos, deberán ajustarse y sujetarse, en todos aquellos aspectos relativos a la conservación, preservación, uso y aprovechamiento del recurso hídrico, a los lineamientos y directrices contenidos en los instrumentos de planificación señalados en el presente artículo.

Artículo 5°. *Seguimiento a la planificación y administración del recurso hídrico.* El seguimiento y la evaluación del desarrollo de la política de planificación y administración del recurso hídrico, contenida en este proyecto de ley, corresponde al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Para ello, realizará el diseño y desarrollo de los indicadores de gestión del recurso hídrico.

Artículo 6°. *Del Plan Hídrico Nacional.* El Plan Hídrico Nacional es el instrumento mediante el cual se definen las prioridades y metas de la planificación y administración del recurso hídrico a nivel nacional, así como la definición de responsabilidades y los mecanismos de articulación entre las diferentes entidades y organismos de carácter nacional, regional y local que intervienen en dicha planificación.

Como mínimo, a partir del diagnóstico del estado del recurso hídrico a nivel nacional y regional, el Plan deberá contener los objetivos, metas, plazos e inversiones prioritarias y necesidades de reglamentación, para:

- a) La conservación y recuperación de la disponibilidad de agua;
- b) El control y reducción de la contaminación hídrica;
- c) La prevención y reducción de riesgos hidrológicos;
- d) La investigación y conocimiento sobre el recurso;
- e) La identificación de las cuencas hidrográficas que requieran de manera prioritaria la adopción del respectivo Plan de Ordenación y Manejo;
- f) La exploración y aprovechamiento sostenible de aguas superficiales y subterráneas, incluidas las aguas termales y minerales, y
- g) El monitoreo y seguimiento del recurso hídrico.

Asimismo, el Plan deberá contener una estrategia para el seguimiento y control de su cumplimiento.

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con el soporte técnico y científico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM; del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis”, Invemar; de la Dirección General Marítima, DIMAR; del Instituto Colombiano de Geología y Minería, Ingeominas, de las autoridades ambientales competentes, y de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, Cormagdalena, formulará y adoptará, previa consulta al Consejo Nacional Ambiental, el Plan Hídrico Nacional con un horizonte de planificación de 20 años, sin perjuicio de su actualización periódica y revisión justificada.

Los integrantes del Sistema Nacional Ambiental, así como todas las demás entidades estatales, deberán suministrar al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, sin costo alguno, toda la información requerida para la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan.

Parágrafo 1°. El Plan será de obligatoria observancia por parte de todos los organismos y entidades involucrados en la planificación y administración del recurso hídrico, lo que deberá reflejarse en sus respectivos Planes de Gestión, incluido el ordenamiento hidrológico, de que trata el artículo 4° de la Ley 161 de 1994, realizado por la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, Cormagdalena.

Parágrafo 2°. El Plan deberá formularse y adoptarse en un plazo máximo de dos (2) años a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

Parágrafo 3°. El contenido del Plan de Aguas Marinas y Costeras de que trata el artículo 7° de la presente ley, será incorporado en el Plan Hídrico Nacional.

Artículo 7°. *Plan de Aguas Marinas y Costeras.* El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con el soporte técnico de la Comisión Colombiana del Océano, CCO, formulará y adoptará, previa consulta al Consejo Nacional Ambiental, el Plan de Aguas Marinas y Costeras con un horizonte de planificación de 20 años, sin perjuicio de su actualización periódica y revisión justificada.

El Plan de Aguas Marinas y Costeras será el eje estructurante del Plan de Desarrollo del Territorio Marítimo y Costero Nacional, cuya formulación será coordinada por la Comisión Colombiana del Océano, CCO.

Parágrafo 1°. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en coordinación con la Comisión Colombiana del Océano, CCO, elaborará el Programa Nacional de Investigación, Evaluación, Prevención, Reducción y Control de Fuentes Terrestres y Marinas de Contaminación al Mar, PNICM.

Artículo 8°. *De los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas.* **Considerando al recurso hídrico como eje estructurante de la ordenación, las autoridades ambientales competentes elaborarán y adoptarán, gradualmente, el Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica de que tratan los artículos 316 y siguientes del Decreto 2811 de 1974 –Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente–, para cada una las cuencas ubicadas en su área de jurisdicción, dando prelación a aquellas definidas como prioritarias en el Plan Hídrico Nacional.**

Si la cuenca comprende el área de jurisdicción de más de una autoridad ambiental, los Planes de Ordenación y Manejo serán desarrollados por las Comisiones Conjuntas de que trata el parágrafo tercero del artículo 33 de la Ley 99 de 1993, conformadas por todas las autoridades ambientales competentes, incluyendo dentro de estas a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales. Las decisiones de las Comisiones Conjuntas son de obligatoria observancia por parte de las autoridades ambientales correspondientes, quienes deberán incorporarlas en sus respectivos planes de acción y de gestión. Los recursos financieros requeridos para la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Ordenación y Manejo aprobado por las Comisiones Conjuntas serán aportados por las respectivas autoridades ambientales competentes, en la proporción que les corresponda, y se manejarán mediante fiducia, encargo fiduciario o una figura similar.

Parágrafo 1°. En el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, en caso de ser necesario, se identificará la necesidad y viabilidad de transvases entre cuencas, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional.

Parágrafo 2°. El acto administrativo mediante el cual las autoridades ambientales competentes adopten el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica deberá contener el análisis y evaluación de las observaciones presentadas por el Consejo de Cuenca.

Parágrafo 3°. Una vez adoptado el Plan Hídrico Nacional, en aquellas cuencas que se definan como prioritarias, las autoridades ambientales competentes deberán iniciar el proceso de formulación del respectivo Plan de Ordenación y Manejo en un plazo no superior a sesenta (60) días hábiles, previa la conformación de la correspondiente Comisión Conjunta en el caso de cuencas compartidas. Asimismo, durante este lapso se dará inicio al proceso de convocatoria para la conformación de los Consejos de Cuenca, de conformidad con el reglamento que para tal efecto expida el Gobierno Nacional.

Parágrafo 4°. Una vez iniciado el proceso de formulación del Plan de Ordenación y Manejo correspondiente, su elaboración y adopción deberá culminarse en un plazo no superior a tres (3) años, conforme a la categorización que defina el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con base en parámetros tales como tamaño de la cuenca, densidad poblacional y tipo de actividades económicas y productivas que se desarrollen al interior de la misma.

Parágrafo 5°. Cuando dos o más autoridades ambientales tengan jurisdicción sobre una misma cuenca hidrográfica o acuífero, la Comisión Conjunta de que trata el parágrafo tercero del artículo 33 de la Ley 99 de 1993, determinará el valor de las tasas ambientales a que hubiere lugar, y coordinará su implementación y la ejecución de los recursos correspondientes.

Parágrafo 6°. En las cuencas definidas y priorizadas por el Plan Hídrico Nacional o por las autoridades ambientales competentes, cuyo cauce principal vierta sus aguas al Océano Pacífico o al Mar Caribe, las playas, sus zonas aledañas costeras y los ecosistemas marinos estratégicos, serán considerados dentro de la unidad de planificación y administración del recurso hídrico, previo concepto del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis”, Invemar, para efectos de que sean objeto de ordenación.

Artículo 9°. *Consejos de Cuenca.* Créanse los Consejos de Cuenca como órganos de consulta, de conformación mixta, en el proceso de diagnóstico, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los Planes de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, en los cuales se garantizará la participación de las entidades territoriales, de las entidades públicas con representación en la zona, de la comunidad, de la academia o centros de investigación, y de los usuarios del recurso hídrico, incluyendo los que correspondan a las aguas marinas y costeras, cuando sea del caso. El Gobierno Nacional reglamentará su conformación y funcionamiento.

CAPITULO II

Asignación y uso del recurso hídrico

Artículo 10. *Uso público.* Con las excepciones previstas en el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente, las aguas de dominio público son de uso público y su administración y manejo corresponde al Estado, de acuerdo con las previsiones legales y sin perjuicio de los derechos previamente adquiridos.

Artículo 11. *Modos de acceder al uso y aprovechamiento del recurso hídrico.* **El agua podrá utilizarse o aprovecharse, en forma eficiente y beneficiosa, en cualquier actividad debidamente autorizada. El derecho al uso y aprovechamiento del agua solo se puede obtener por ministerio de la ley, por concesión o por permiso para el estudio del recurso hídrico emanados de la autoridad ambiental competente. Al contrato de concesión a que hacen referencia los artículos 25 y 39.1 de la Ley 142 de 1994 - Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios, se le aplicará, en lo pertinente, lo establecido en la presente ley para las concesiones.**

Artículo 12. *Concesiones.* La concesión es la autorización que una autoridad ambiental competente otorga para que una persona natural o jurídica, pública o privada, utilice el agua de dominio público para usos definidos, con un caudal y por un término determinados.

Parágrafo. No requiere concesión el aprovechamiento de aguas privadas ni el derecho al uso por ministerio de la ley.

Artículo 13. *Del otorgamiento de concesiones.* **Para otorgar una concesión, las autoridades ambientales competentes, con base en estudios técnicos sustentados, deberán establecer el caudal disponible, teniendo en cuenta la oferta hídrica de la corriente o cuerpo de agua, así como el caudal previamente adjudicado y el caudal necesario para satisfacer los usos por ministerio de ley, tanto aguas arriba como aguas abajo del posible punto de captación.**

Sólo se otorgarán concesiones cuando el caudal disponible sea suficiente para satisfacer el requerimiento y no se comprometa el caudal ecológico de que trata el artículo 21 de la presente ley.

El concesionario deberá hacer uso de la concesión en los términos y condiciones establecidos por la autoridad ambiental competente. Cualquier modificación de los términos y condiciones de la concesión requerirá autorización previa de la autoridad ambiental respectiva.

En los casos en que se presenten fenómenos naturales o circunstancias de fuerza mayor que afecten la disponibilidad

espacial o temporal del recurso, la concesión no garantiza la existencia o invariabilidad del caudal que se otorga.

Parágrafo 1°. **Mientras no se cuente con el Registro Público de Concesiones y Permisos de que trata el artículo 50 de la presente ley, que permita conocer con exactitud el balance hídrico, el caudal disponible se estimará usando la metodología que para el efecto establezca el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, en un término no mayor a 3 meses contados a partir de la entrada de vigencia de la presente ley.**

Parágrafo 2°. **El Gobierno Nacional, mediante reglamento, definirá los casos que requieran concesión para el uso de aguas marinas y costeras, así como permiso de vertimientos a dichas aguas. Tales concesiones y permisos serán otorgados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, sin perjuicio de la obtención de autorización o permiso de uso de playas y terrenos de bajamar, que corresponde expedir a la Dirección General Marítima, DIMAR.**

Artículo 14. *Duración de las concesiones.* **Las concesiones de agua se otorgarán por la vida útil del proyecto, sin que exceda un término de veinte (20) años. En los casos de prestación de servicios públicos de agua potable y de generación de energía, y para proyectos de interés público, se otorgarán por un período hasta de cincuenta (50) años.**

Cuando la autoridad ambiental competente otorgue la concesión por un plazo inferior al solicitado por el usuario, deberá soportar su decisión con base en estudios técnicos debidamente sustentados.

Artículo 15. *Revisión de concesiones.* **Cuando se presenten circunstancias de fuerza mayor que deriven en situaciones de emergencia y afecten gravemente la disponibilidad del recurso, las autoridades ambientales podrán modificar o revisar las concesiones y permisos otorgados, e imponer limitaciones a los aprovechamientos ya autorizados, de manera temporal, sin lugar a indemnización.**

De la misma manera, cuando por causas naturales se generen restricciones para cubrir plenamente las concesiones otorgadas en una fuente, la autoridad ambiental competente establecerá una redistribución del agua disponible, dando siempre prioridad a la destinación para el consumo humano.

Artículo 16. *Renovación de las concesiones.* **Todo concesionario tendrá derecho a que se le renueve su concesión, en los mismos términos y condiciones vigentes, siempre que haya cumplido debidamente con las obligaciones impuestas y que no se presenten circunstancias que afecten negativamente la disponibilidad del recurso.**

La renovación deberá solicitarse por lo menos con seis meses de antelación y no antes de un año al vencimiento de la misma y, en caso necesario, deberá acompañarse de la información técnica que sustente la petición. En todo caso, la autoridad ambiental competente deberá pronunciarse dentro del término y condiciones señalados en el artículo 29 de la presente ley; hasta tanto no se pronuncie se entenderá que se mantienen las condiciones vigentes de la concesión cuya renovación se solicita.

Artículo 17. *Cesión de las concesiones.* **Previo autorización de la autoridad ambiental competente, el concesionario puede traspasar el derecho al uso y aprovechamiento del recurso hídrico que se le ha concedido. Cuando la cesión del derecho de acceso al uso y aprovechamiento del recurso hídrico implique únicamente el cambio del titular, solo será necesario informar oportunamente a la autoridad ambiental competente, a efectos de la actualización del registro de concesiones correspondiente.**

En los eventos previstos en el presente artículo, en la solicitud se deberá indicar y acreditar la información básica del cedente y del cesionario y, en caso de tratarse de modificación de las condiciones

de la concesión, ellas se deberán indicar y sustentar con la información técnica correspondiente.

Artículo 18. *Terminación de las concesiones.* La concesión terminará por las siguientes causales:

1. Por vencimiento del plazo establecido para la concesión, sin que se haya renovado.

2. Por renuncia del concesionario.

3. Por acto administrativo motivado, expedido por la autoridad ambiental competente, con fundamento en cualquiera de las siguientes causales:

- Como resultado de una sanción impuesta por violación a las normas ambientales, sujetándose a las reglas de debido proceso.

- Por dar al agua un uso diferente al autorizado.

- Por la cesión del derecho de acceso al uso y aprovechamiento del recurso hídrico sin autorización de la autoridad ambiental competente.

- Por suspender o no hacer uso de la concesión durante un (1) año continuo, sin causa justificada.

- Por no iniciar la utilización de la concesión en el plazo previsto en el acto de otorgamiento, sin causa justificada.

- Por agotamiento del recurso hídrico, debidamente comprobado por la autoridad ambiental.

Artículo 19. *Reuso.* En el acto administrativo de otorgamiento de una concesión o con posterioridad a este mismo, la autoridad ambiental competente podrá autorizar que las aguas residuales resultantes de esta concesión sean reusadas por otros usuarios debidamente identificados, siempre que el agua cumpla con los estándares de calidad establecidos para los usos previstos.

La solicitud de reuso deberá hacerse por escrito presentado por los interesados ante la autoridad ambiental competente, y deberá contener la información pertinente establecida para las solicitudes de concesiones y permisos de vertimiento, la cual se deberá acompañar de los documentos allí establecidos.

En caso de autorizarse el reuso previsto en este artículo, el concesionario no pagará tasa retributiva por las cargas contaminantes contenidas en el caudal cedido y el receptor de las aguas residuales no pagará tasa por uso por el caudal o volúmenes recibidos.

En el acto administrativo que otorga la concesión o aprueba el reuso, se preverán las obligaciones de los beneficiarios de una y otro en cuanto a los vertimientos, de modo que en todo momento se garantice el cumplimiento de las normas de calidad previstas para los efluentes.

Artículo 20. *De los estándares de calidad del agua.* El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en consulta con los Ministerios de la Protección Social y de Agricultura y Desarrollo Rural, de acuerdo con sus respectivas competencias, y con el apoyo técnico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM; del Instituto Colombiano de Geología y Minería, Ingeominas; del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis”, Invemar, y de la Dirección General Marítima, DIMAR, según sea el caso, definirá con sujeción a estudios técnicos, los estándares de calidad mínima que debe tener el agua según su uso y que deben satisfacerse para garantizar la protección y conservación de los recursos hidrobiológicos y de los ecosistemas asociados.

La fijación de los estándares de calidad del agua que deben satisfacerse para la prestación del servicio público domiciliario de acueducto corresponderá al Ministerio de la Protección Social.

Artículo 21. *Caudal ecológico de las corrientes superficiales.* Entiéndese por caudal ecológico de las corrientes superficiales los caudales mínimos que, de acuerdo con los regímenes hidrológicos,

deberán mantener las corrientes superficiales en sus diferentes tramos, a fin de garantizar la conservación de los recursos hidrobiológicos y de los ecosistemas asociados.

El caudal ecológico para cada corriente superficial o tramo de la misma será establecido por las autoridades ambientales competentes, de acuerdo con los lineamientos técnicos que para el efecto establezca el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM.

Hasta tanto se establezcan los lineamientos a que se refiere este artículo, se considerará como tal el caudal de permanencia en la fuente durante el 90% del tiempo, sin perjuicio de que se respeten los derechos adquiridos mediante concesiones vigentes.

CAPITULO III

Control de la contaminación y vertimientos

Artículo 22. *De los vertimientos.* Los vertimientos que afecten a los cuerpos de agua deberán cumplir con los estándares establecidos, y sujetarse a los términos y condiciones señalados por la autoridad ambiental competente en la respectiva autorización.

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con el apoyo técnico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM; del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis”, Invemar, y de la Dirección General Marítima, DIMAR, definirá los criterios que deben ser aplicados por las autoridades ambientales competentes para autorizar los vertimientos a los cuerpos de agua.

Artículo 23. *Estándares de vertimientos.* El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en consulta con el Ministerio de la Protección Social, establecerá los parámetros mínimos que se deben controlar en los vertimientos a los cuerpos de agua continentales, marinos y costeros, incluyendo en todo caso aquellos que afectan de manera directa la salud humana y considerando de manera especial las sustancias peligrosas y potencialmente peligrosas para la misma, al igual que sus concentraciones permisibles.

Corresponde a las autoridades ambientales competentes, con base en la metodología que para el efecto defina el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, fijar los estándares mínimos exigibles para los vertimientos a los cuerpos de agua ubicados en el área de su jurisdicción, de acuerdo con los usos y objetivos de calidad establecidos en el respectivo Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca. Dichos estándares deberán definirse teniendo en cuenta, como mínimo, la naturaleza de los cuerpos de agua, la vulnerabilidad y capacidad de asimilación y dilución de la fuente receptora, sus condiciones de autodepuración y los usos esperados de la fuente aguas abajo de las descargas.

Artículo 24. *Metas de calidad del recurso hídrico.* A efectos de alcanzar de manera gradual los estándares de calidad de los cuerpos de agua, según el uso esperado de los mismos señalado en el Plan Hídrico Nacional y en los respectivos Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas, las autoridades ambientales competentes definirán en su jurisdicción metas quinquenales de calidad del recurso hídrico. Con base en dichas metas, establecerán un programa de cumplimiento escalonado y definirán los estándares que deben satisfacer los vertimientos a los cuerpos de agua; este programa deberá ser parte integral de los respectivos Planes de Acción y de Gestión.

Cuando no se esté logrando la meta de calidad establecida, la autoridad ambiental competente deberá identificar las causas que impiden su cumplimiento y establecer y ejecutar un plan de acción específico para su mejoramiento.

Artículo 25. *Permisos de vertimiento.* Todo vertimiento a cuerpos de agua deberá contar con el correspondiente permiso de la autoridad ambiental competente. Para su otorgamiento, las

autoridades ambientales competentes, con base en estudios técnicos debidamente sustentados, deberán establecer previamente la naturaleza del cuerpo de agua receptor, su vulnerabilidad, capacidad de asimilación y de dilución, sus condiciones de autodepuración, los permisos de vertimiento previamente adjudicados, y considerar los usos esperados del cuerpo de agua receptor.

Parágrafo. En el caso de vertimientos a sistemas de alcantarillado, diferentes a las aguas residuales de origen doméstico, los mismos deberán satisfacer los requisitos de calidad que señale el prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, de acuerdo con lo estipulado en el contrato de servicios públicos respectivo. A su vez, el prestador del servicio deberá cumplir con las regulaciones establecidas en materia de vertimientos a los cuerpos de agua receptores.

Artículo 26. Duración de los permisos de vertimiento. Los permisos de vertimiento se podrán otorgar hasta por diez (10) años, renovables por el mismo período siempre que se haya dado cumplimiento a los requerimientos del permiso existente. En todo caso, al momento de su renovación las condiciones del mismo deberán ser revisadas con fundamento en las metas de calidad definidas por la autoridad ambiental correspondiente.

Parágrafo. La renovación del permiso de vertimiento deberá solicitarse por lo menos con seis meses de antelación y no antes de un año al vencimiento del mismo. En todo caso, la autoridad ambiental competente deberá pronunciarse dentro del término y condiciones señalados en el artículo 29 de la presente ley; hasta tanto no se pronuncie se entenderá que se mantienen las condiciones vigentes del permiso de vertimiento cuya renovación se solicita.

Artículo 27. Terminación de los permisos de vertimiento. El permiso de vertimiento terminará por las siguientes causales:

1. Por vencimiento del plazo establecido en el permiso, sin que se haya renovado.
2. Por renuncia del titular del permiso.
3. Por suspender o no hacer uso del permiso durante un (1) año continuo, sin causa justificada.
4. Por no iniciar la utilización del permiso en el plazo previsto en el acto de otorgamiento, sin causa justificada.
5. Por terminación de la concesión que origina el vertimiento.

Artículo 28. Causales de suspensión del permiso de vertimientos. El permiso de vertimiento se suspenderá por acto administrativo motivado, expedido por la autoridad ambiental competente, con fundamento en cualquiera de las siguientes causales, sin perjuicio de las sanciones que pueda imponer la autoridad competente:

1. Por incumplimiento de las condiciones establecidas en el permiso o por violación a las normas ambientales que sean aplicables.
2. Por la cesión del permiso sin autorización de la autoridad ambiental competente.

CAPITULO IV

Requisitos y trámites de concesiones y permisos de vertimiento

Artículo 29. De los requisitos y trámites de concesiones y permisos de vertimiento. Las solicitudes de concesión y de permisos de vertimiento deberán tramitarse de manera simultánea, cuando a ello haya lugar, con el objeto de facilitar el manejo integrado del recurso.

El Gobierno Nacional definirá por medio de reglamento el trámite que aplicarán las autoridades ambientales para el otorgamiento y registro de las concesiones y los permisos de vertimiento.

La solicitud de concesión deberá hacerse por escrito presentado personalmente ante la autoridad ambiental competente, en el cual se deberá identificar el solicitante, la fuente o fuentes de que se va

a hacer uso, los usos pretendidos, los volúmenes solicitados, los puntos y sistemas de captación y de medición, los puntos de restitución de sobrantes, el plazo solicitado, la descripción del proyecto o actividad, la información técnica sobre calidad y cantidad del recurso hídrico, y la demás que sea relevante para que la autoridad ambiental competente pueda tomar su decisión con conocimiento de causa y basada en la realidad de la cuenca abastecedora.

La petición deberá acompañarse de los documentos que acrediten la personería del solicitante, la autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor, y un certificado actualizado de registro y tradición o la prueba de la posesión o tenencia del predio en el cual se ubica el punto de captación. Igualmente, se suministrará la información técnica debidamente sustentada.

La solicitud de permiso de vertimiento deberá hacerse por escrito presentado personalmente ante la autoridad ambiental competente, en el cual se deberá identificar el solicitante, el proyecto o actividad, la corriente o cuerpo de agua que habrá de recibir el vertimiento y sus características, así como los puntos de vertimiento, la caracterización del vertimiento o residuos, descripción de los sistemas de tratamiento o medidas que se adoptarán para cumplir con las exigencias legales, y los sistemas de medición y monitoreo.

La petición deberá acompañarse de los documentos que acrediten la personería del solicitante, la autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor, y un certificado actualizado de registro y tradición o la prueba de la posesión o tenencia del predio en el cual se ubica el punto de vertimiento. Igualmente, se deberá allegar la información técnica debidamente sustentada.

Los trámites de concesiones y permisos de vertimiento serán públicos y cualquier persona, sin necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en dichas actuaciones, en las oportunidades y en los términos que determine el reglamento.

Las autoridades ambientales, de oficio o a solicitud de las autoridades territoriales y de los organismos de control, podrán convocar consultas públicas con el fin de recoger información y oír a los interesados en cualquier momento del procedimiento. Las autoridades ambientales competentes deberán desarrollar mecanismos para informar de manera pública y actualizada el estado y avance de los procedimientos administrativos correspondientes a los trámites de concesiones y permisos.

Una vez recibida a satisfacción por parte de la autoridad ambiental competente la totalidad de la información exigida para el análisis de la solicitud de la concesión y/o del permiso de vertimiento, dicha autoridad deberá pronunciarse, mediante acto administrativo motivado, en un término no superior a sesenta (60) días hábiles. El silencio de la autoridad ambiental competente no equivale a decisión positiva.

Los trámites para los permisos de vertimiento a las aguas marinas y costeras, tendrán términos especiales de acuerdo con la reglamentación que para ello expida el Gobierno Nacional.

CAPITULO V

Aguas subterráneas

Artículo 30. Estudios e investigaciones sobre aguas subterráneas. Los estudios e investigaciones a escala nacional o regional de las aguas subterráneas corresponden al Instituto Colombiano de Geología y Minería, Ingeominas, de acuerdo con la priorización de las zonas de investigación hidrogeológica definidas en el Plan Hídrico Nacional.

Con base en estudios y en la metodología que para el efecto defina Ingeominas, en coordinación con el IDEAM, las autoridades ambientales competentes elaborarán la caracterización y cuantificación de la oferta aprovechable de los acuíferos en el territorio de su jurisdicción, con énfasis en aquellos acuíferos identificados como prioritarios en el Plan Hídrico Nacional y en los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas.

Cuando se trate de acuíferos compartidos las autoridades ambientales competentes deberán acordar estas actividades por medio de las Comisiones Conjuntas de que trata el parágrafo 3° del artículo 33 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 8° de la presente ley.

Artículo 31. *Prospección de aguas subterráneas.* Cualquier persona podrá solicitar a la autoridad ambiental competente permiso para hacer prospección en busca de aguas subterráneas para su posterior aprovechamiento, aún en terreno ajeno, previo consentimiento del propietario o, cuando corresponda, el establecimiento de la servidumbre correspondiente. El titular del permiso de prospección tendrá prioridad para que se le otorgue la concesión del uso de las aguas exploradas, siempre y cuando cumpla plenamente con las disposiciones establecidas en la presente ley y en sus decretos reglamentarios en lo referente a esta materia.

La solicitud de permiso deberá contener la información sobre la identificación del predio o predios y su situación de dominio, superficie para la cual se solicita el permiso y término del mismo, el sistema y las especificaciones de perforación, y características hidrogeológicas de la zona si fueren conocidas.

Con la solicitud se deberán acompañar los documentos que acrediten la personería del solicitante, la propiedad, posesión o tenencia de predio o predios y la autorización escrita del propietario, poseedor o tenedor si se tratare de predios ajenos.

La prospección de aguas subterráneas deberá hacerse de acuerdo con los protocolos que para el efecto establezca el Instituto Colombiano de Geología y Minería, Ingeominas, en coordinación con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, y el control, monitoreo y seguimiento correspondiente deberá ser realizada por la respectiva autoridad ambiental competente.

Artículo 32. *Explotación.* Salvo en lo relacionado con su utilización para satisfacer necesidades de consumo humano, especialmente mediante la prestación del servicio público domiciliario de acueducto, el aprovechamiento de las aguas subterráneas únicamente se podrá autorizar siempre que se establezca técnicamente, por parte de las autoridades ambientales competentes, que el volumen de recarga del acuífero excede la demanda de los usos autorizados.

Artículo 33. *Monitoreo y seguimiento a la oferta hídrica subterránea.* **El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, será el responsable de coordinar a las autoridades ambientales competentes para desarrollar el monitoreo y seguimiento de la oferta hídrica subterránea a nivel nacional.**

Artículo 34. *Aguas minerales y termales.* **El Instituto Colombiano de Geología y Minería, Ingeominas, desarrollará los estudios e investigaciones relativas a las aguas minerales y termales, de acuerdo con las prioridades que se establezcan en el Plan Hídrico Nacional.**

CAPITULO VI

Gestión de riesgos asociados al manejo del recurso hídrico

Artículo 35. *Conocimiento de los riesgos.* **Se entiende por conocimiento de los riesgos los estudios que llevan a identificar y evaluar las posibles amenazas asociadas al recurso hídrico, incluyendo entre otras crecientes lentas y súbitas, sequías, fenómenos de remoción en masa y falla de presas, así como la vulnerabilidad y el riesgo de los elementos expuestos a estos fenómenos en un territorio determinado.**

Se entiende por evaluación de la amenaza el proceso mediante el cual se determina la probabilidad de ocurrencia y la severidad de un evento, en un tiempo específico y en un área determinada; representa la recurrencia estimada y la ubicación geográfica de eventos probables. Los estudios requeridos para la identificación de las amenazas asociadas al recurso hídrico serán responsabilidad de las autoridades ambientales competentes, apoyadas por IDEAM el Ingeominas, DIMAR y las distintas entidades territoriales.

Se entiende por análisis de vulnerabilidad el proceso mediante el cual se determina el nivel de exposición y la predisposición a la pérdida de un elemento o grupos de elementos ante una amenaza específica. Los análisis de vulnerabilidad serán realizados por las administraciones municipales o distritales. Para la infraestructura de servicios vitales como acueducto, alcantarillado, energía, vías, poliductos y comunicaciones, se efectuará un análisis específico por parte de las entidades responsables de dicha infraestructura.

Se entiende por evaluación del riesgo el resultado de relacionar la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de determinar las posibles consecuencias sociales, económicas y ambientales asociadas a uno o varios eventos. La evaluación del riesgo asociado al recurso hídrico se adelantará en forma conjunta entre las autoridades ambientales respectivas y las entidades territoriales de orden departamental, municipal y distrital.

Artículo 36. *Programas Regionales de Reducción de Riesgo.* **Se entiende por Programa de Reducción de Riesgos la priorización y la planificación de todas aquellas actividades que reduzcan tanto la vulnerabilidad de la infraestructura y de la población ante eventos peligrosos asociados al recurso hídrico, así como la magnitud y frecuencia de estos eventos, con el objetivo de reducir el impacto de posibles desastres en una región.**

La elaboración de los Programas Regionales de Reducción de Riesgo será responsabilidad de las gobernaciones en coordinación con los municipios, distritos, autoridades ambientales y entes responsables de la infraestructura de servicios vitales, en concordancia con los lineamientos, políticas y directrices emanados del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres. Este programa determinará la entidad u organización encargada de ejecutar las obras y acciones de acuerdo a la priorización correspondiente.

Dicho programa deberá incorporarse en los planes de desarrollo municipal, distrital y departamental, en los planes de gestión de las autoridades ambientales, en los planes de inversión de los entes responsables de la infraestructura de servicios vitales y los planes de contingencia municipales y distritales.

CAPITULO VII

Drenaje urbano y zonas de ronda

Artículo 37. *Drenaje urbano.* Adiciónase el artículo 14.23 de la Ley 142 de 1994, en el sentido de considerar el drenaje urbano como actividad complementaria del servicio público domiciliario de alcantarillado. El drenaje urbano consiste en la recolección municipal de aguas lluvias, incluidas las de las áreas públicas, por medio de tuberías, canales y conductos, así como su tratamiento y disposición final.

Cuando la red hídrica natural en zona urbana y/o suburbana deba ser intervenida para hacer parte del sistema de drenaje urbano, su adecuación, operación y mantenimiento serán consideradas como actividades propias de este servicio.

En un plazo no superior a 24 meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, las administraciones municipales o distritales deberán incorporar en su ordenamiento territorial el manejo y control del drenaje urbano, con énfasis en su integración con la estructura urbana, la protección y defensa de los cuerpos de agua y sus zonas de protección y manejo, y la reducción de riesgos.

Artículo 38. *Responsabilidades por obras nuevas.* En las obras nuevas de urbanización o construcción deberán prevenirse y mitigar los riesgos asociados con el agua para la infraestructura o edificaciones previamente existentes. Si como consecuencia de dichas obras se produjeren daños o inundaciones por el inadecuado manejo de las aguas, quien haya ocasionado el daño deberá tomar las medidas necesarias, incluso realizar las obras requeridas, para solucionar el problema de modo que no se perturbe el uso, disfrute, tenencia o posesión del bien, sin perjuicio de que se indemnice el daño causado.

Los municipios y distritos deberán localizar e identificar las áreas críticas de preservación y control de la hidrógrafa natural en suelo urbano, suburbano y de expansión urbana, y expedir las normas urbanísticas que definen las directrices de ordenamiento, usos e intensidad de los usos del suelo para sus áreas de influencia. El otorgamiento de las licencias respectivas estará sujeto al cumplimiento de dichas normas, para lo cual las autoridades competentes exigirán la información técnica necesaria.

Artículo 39. Del control de inundaciones. Para la minimización de los riesgos de alteración de los cauces y el impacto socioeconómico de las inundaciones, los cuerpos de agua deberán tener definidas y delimitadas sus respectivas rondas.

Artículo 40. Determinación de las rondas. Se entiende por ronda la franja de terreno inmediata al cauce de los cuerpos de agua continentales y delimitada por la línea que define el nivel máximo de las aguas asociado a eventos hidrológicos extremos, también denominada playa fluvial o lacustre, adicionada hasta en 30 metros, como zona de protección y manejo del cuerpo de agua, según lo determinen las características y condiciones propias de la región.

Los períodos de recurrencia para determinar las cotas de inundación de los eventos hidrológicos extremos serán determinados por la autoridad ambiental competente, en coordinación con las autoridades territoriales, considerando los niveles de riesgo y de vulnerabilidad de las áreas potencialmente afectadas, de manera que el control, la reducción y mitigación de riesgos sea costo efectiva, sin que en ningún caso dicho período sea inferior a 15 años.

Las autoridades ambientales competentes, previo los estudios técnicos correspondientes y con base en los criterios y usos potenciales que por vía general señale el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, deberán delimitar las rondas y elaborar y divulgar la cartografía respectiva, especificando los usos potenciales a ser desarrollados en las mismas, para su inclusión en los respectivos Planes de Ordenación y Manejo de Cuenca.

Parágrafo. La ronda definida en el presente artículo corresponde a los bienes señalados en los literales c) y d) del artículo 83 del Decreto 2811 de 1974 - Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en lo que respecta a cuerpos de agua continentales, los cuales, salvo los derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado. Bienes que en todo caso estarán afectos al espacio público.

Artículo 41. De la recuperación y uso de las rondas. Las autoridades ambientales y territoriales deberán propender por la recuperación y protección de las rondas y por su incorporación al ordenamiento territorial como espacios para la conservación de los recursos naturales renovables y el uso público, previo análisis de riesgos y en concordancia con las funciones y servicios ambientales y usos potenciales que para dichas zonas se hayan definido en el respectivo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca y en el Plan de Ordenamiento Territorial, para lo que se deberá contar con la debida autorización de la autoridad ambiental competente.

Parágrafo 1º. En las zonas de ronda en áreas urbanas y suburbanas se podrá construir infraestructura para el uso público de carácter recreativo, tales como senderos peatonales, ciclorrutas y mobiliario urbano, siempre y cuando se integren paisajísticamente al cuerpo de agua y a sus zonas aledañas.

Parágrafo 2º. En ningún caso se podrán construir vías urbanas en el borde de las playas y terrenos de bajamar. Cuando se vayan a construir vías urbanas paralelas a los bordes de playas y terrenos de bajamar, deberá reservarse una franja de extensión peatonal de uso público de al menos cincuenta (50) metros y, adicionalmente,

deberá haber una franja de edificaciones que aislen la franja de extensión peatonal del tráfico automotor. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.

CAPITULO VIII

Instrumentos económicos y financieros para apoyar la planificación y administración del recurso hídrico

Artículo 42. Tasas por uso y tasas retributivas. La utilización del recurso hídrico por cualquier persona natural o jurídica, ya sea para aprovecharlo o para introducir o arrojar directamente en él aguas residuales o servidas de cualquier origen, estará sujeta al pago de tasas por uso y tasas retributivas, respectivamente, cuyos valores serán determinados y recaudados por la respectiva autoridad ambiental competente, entendida esta última como aquella con la facultad de otorgar la concesión o el permiso de vertimiento correspondiente. Todo lo anterior, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional.

El propósito de las tasas ambientales, como instrumentos económicos, es incentivar a los usuarios del recurso hídrico a tomar decisiones costo efectivas que se reflejen en un uso racional del mismo en relación con la cantidad demandada y con la calidad de los vertimientos a él incorporados.

Todo usuario deberá contribuir proporcionalmente al cubrimiento de los costos eficientes requeridos para la ordenación, control, monitoreo, seguimiento, protección, renovabilidad y recuperación del recurso hídrico. La base gravable de las tasas por uso y retributiva está constituida, respectivamente, por el caudal concesionado y el volumen captado, y por la cantidad y características de los vertimientos realizados.

Para la determinación de los valores de las tasas ambientales a que se refiere el presente artículo deberán tenerse en cuenta los siguientes factores:

42.1 Factor de oferta del recurso. Los valores de las tasas deberán determinarse de manera diferencial según las particularidades de los cuerpos de agua o tramos de los mismos, teniendo en cuenta, para la tasa por uso, las características de la oferta hídrica disponible y el nivel de agotamiento del recurso, y, para la tasa retributiva, la naturaleza de los cuerpos de agua, en cuanto a la vulnerabilidad, la capacidad de asimilación y dilución y las condiciones de autodepuración de la fuente receptora.

En cuanto los valores de la tasa, todo usuario tendrá derecho a recibir el mismo tratamiento que cualquier otrosí, con relación al mismo cuerpo de agua o tramo del mismo, el caudal concesionado, el volumen captado y retornado a la fuente, o la calidad de los vertimientos realizados, según sea el caso, son iguales.

42.2 Factor de intensidad de uso. Para cada cuerpo de agua o tramo del mismo, el valor de las tasas deberá determinarse considerando, para la tasa por uso, la relación entre la demanda y la oferta hídrica disponible, y, para la tasa retributiva, la relación entre la carga vertida y la capacidad de asimilación del cuerpo de agua y el objetivo de calidad establecido para el mismo.

42.3 Factor de recuperación de costos. La tasa por uso cubrirá las inversiones directamente relacionadas con la protección y renovabilidad del recurso hídrico; la tasa retributiva se calculará a partir del costo equivalente de remoción de las cargas contaminantes en la magnitud que permita alcanzar los objetivos de calidad establecidos para el cuerpo de agua o tramo del mismo. En ambos casos, las tasas deben ser suficientes para cubrir adicionalmente los costos necesarios para su implementación y control y el monitoreo y seguimiento del recurso hídrico.

Con base en lo anteriormente señalado, el Gobierno Nacional aplicará el siguiente método, con sujeción al cual las autoridades ambientales competentes determinarán el valor de las tasas por uso y retributivas:

a) A cada uno de los factores se le definirán variables cuantitativas y asignarán coeficientes que permitan determinar el grado de afectación del recurso hídrico, con relación a los caudales demandados o a los niveles de contaminación vertidos, según sea el caso;

b) Los coeficientes reflejarán, según corresponda, la diversidad de los cuerpos de agua en cuanto a la oferta hídrica disponible y su capacidad de asimilación de cargas contaminantes, y

c) Los factores, variables y coeficientes serán sintetizados en fórmulas matemáticas que permitan el cálculo y determinación de las tasas correspondientes.

Parágrafo 1°. El pago de las tasas de que trata el presente artículo no exime al usuario de la obligación de obtener la debida concesión de uso o permiso de vertimientos, según sea el caso.

Parágrafo 2°. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, una vez entrada en vigencia la reglamentación a que hace referencia el presente artículo, deberá adecuar las fórmulas tarifarias vigentes para los servicios de acueducto y de alcantarillado, en forma inmediata y por una sola vez, a fin de incorporar lo establecido en el presente artículo.

Artículo 43. *Adquisición y conservación de áreas estratégicas.* Declárese de interés público las áreas de importancia estratégica para la conservación y protección del recurso hídrico.

Los departamentos, municipios y distritos, invertirán anualmente el 1% de los ingresos corrientes, salvo los que tengan destinación específica señalada por la constitución política y la ley, para la adquisición, mantenimiento, conservación y restauración de dichas zonas. Dichos recursos se invertirán bajo el principio de solidaridad de cuenca conforme al Plan de Ordenamiento y Manejo de la respectiva cuenca hidrográfica, dando prelación a la protección de los cuerpos hídricos que surten los sistemas de abastecimiento de agua para el consumo humano.

Parágrafo 1°. El cuidado de las fuentes de agua, de las cuencas y de los bosques generadores de recursos hídricos, o de zonas estratégicas para su conservación, podrá ser compensado por las autoridades ambientales, por el Gobierno Nacional, Departamental, Municipal o Distrital, o por otras entidades públicas o asociaciones de estas, mediante el pago a las personas que se responsabilicen por su conservación.

Artículo 44. *Transferencias del sector eléctrico.* Modificase el parágrafo 3° y adiciónese un nuevo parágrafo al artículo 45 de la Ley 99 de 1993, así:

“**Parágrafo 3°.** En la transferencia a que hace relación este artículo, está incluido el pago de la tasa por uso del agua”.

“**Parágrafo 4°.** Cuando la casa de máquinas de la central de generación hidroeléctrica esté ubicada en un municipio o distrito diferente a los contemplados en el literal b) del numeral 2 del presente artículo, este tendrá derecho a la sexta parte del total de las transferencias a que hace referencia el mencionado numeral, suma esta que se deducirá proporcionalmente de las transferencias asignadas a los municipios o distritos a que se refiere dicho numeral”.

Artículo 45. *Contribución especial.* Los usuarios de aguas embalsadas natural o artificialmente, destinadas a usos diferentes a los de generación de energía eléctrica y cuya capacidad nominal de captación sea igual o superior a 0.30 m³/seg, transferirán a título de contribución el 1% de los ingresos brutos por venta de agua. Esta contribución será pagada a los municipios en cuyos territorios se encuentren el cuerpo del embalse y las cuencas hidrográficas que lo abastecen, de acuerdo con la siguiente distribución:

a) El 50% entre los municipios y distritos en cuya jurisdicción se encuentra el embalse, y de manera proporcional al área del embalse que se encuentre en su territorio;

b) El 50% restante entre los municipios y distritos ubicados en las cuencas hidrográficas que surten el embalse, y de manera proporcional al área de dichas cuencas que se encuentre en su territorio.

Cuando los municipios y distritos sean a la vez cuenca y embalse, participarán proporcionalmente conforme a lo indicado en los literales a) y b) del presente artículo.

Estos recursos solo podrán ser utilizados por los municipios en obras previstas en el plan de desarrollo municipal, con prioridad para proyectos de protección de cuencas y de agua potable, saneamiento básico y ambiental.

Parágrafo 1°. En el caso de que un usuario capte agua de más de un embalse con capacidad nominal de captación superior a 0.30 m³/seg, la distribución de la contribución de que habla el presente artículo se calculará como si se tratara de un solo embalse cuya área es la suma de los embalses y cuyas cuencas hidrográficas abastecedoras son la suma de las áreas de las cuencas abastecedoras.

Parágrafo 2°. Lo dispuesto en el presente artículo modifica, en lo pertinente, el artículo 24.1 de la Ley 142 de 1994.

Artículo 46. *Destinación de los recursos.* Los recursos provenientes de la aplicación de los instrumentos señalados en este Capítulo y que correspondan a las autoridades ambientales competentes, se destinarán por parte de dichas autoridades, bajo el criterio de solidaridad de cuenca y exclusivamente en aquella en donde dichos instrumentos se apliquen y recauden, al ordenamiento, control, monitoreo y seguimiento, protección, recuperación y renovabilidad del recurso hídrico, de conformidad con el respectivo Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional.

Artículo 47. *Cuentas del agua.* Los sistemas contables de las autoridades ambientales competentes deberán contar con un Sistema de Cuentas del Agua, el cual permitirá conocer la información detallada sobre todos los ingresos percibidos por la aplicación de los instrumentos económicos y financieros relacionados con el recurso hídrico y de los gastos hechos con cargo a los mismos, de tal manera que permita distinguirlos de otros ingresos y gastos de la entidad. La Contaduría General de la República, en coordinación con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en plazo no mayor a seis (6) meses establecerá la forma y contenido de dichas cuentas e indicará los mecanismos de evaluación y seguimiento.

CAPITULO IX

Monitoreo y seguimiento del recurso hídrico

Artículo 48. *Monitoreo y seguimiento del recurso hídrico.* En materia de monitoreo y seguimiento del recurso hídrico, se tendrán en cuenta las siguientes competencias:

48.1 El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. **Ejercer la coordinación del monitoreo y seguimiento del recurso hídrico y definir la estrategia para su implementación. Para tales efectos elaborará y mantendrá actualizado los respectivos protocolos que deberán seguir las autoridades y usuarios para hacer el monitoreo y seguimiento, así como los mecanismos de transferencia de información. Igualmente el Instituto manejará la red básica nacional de monitoreo de dicho recurso.**

El Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis”, Invemar, y la Dirección General Marítima, DIMAR, efectuarán el monitoreo y seguimiento del recurso hídrico marino y costero, y definirán la estrategia para su implementación.

48.2 Las autoridades ambientales regionales. **Realizarán el monitoreo y seguimiento a escala regional del recurso hídrico; para tales efectos, deberán instalar y operar una red de monitoreo a partir de la información generada por ellas mismas complementada por información generada por los usuarios.**

Respecto a las aguas marinas, contarán con el apoyo del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis”, Invemar, y de la Dirección General Marítima, DIMAR.

Artículo 49. *Sistema de información.* La información que resulte del monitoreo y seguimiento del recurso hídrico será administrada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, en el Sistema de Información Ambiental, para lo cual definirá los protocolos para su organización y funcionamiento y establecerá los requisitos y las herramientas técnicas a utilizar para la transferencia de datos y el acceso a la información. Respecto a las aguas marinas, se contará con el apoyo del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis”, Invemar, y de la Dirección General Marítima, DIMAR.

La información que sobre el recurso hídrico recopile el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, en el Sistema de Información Ambiental es de carácter público. Las autoridades ambientales tendrán acceso libre y gratuito a toda la información que sobre el recurso hídrico recopile, genere y analice el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM.

Parágrafo. Se considera de utilidad pública e interés social la información relativa a la calidad y a la oferta y uso del recurso hídrico, incluyendo los vertimientos. En consecuencia las autoridades ambientales, los concesionarios, y los titulares de permiso de estudio del recurso hídrico y de vertimientos, están obligados a recopilar y a suministrar al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, sin costo alguno, información sobre sus vertimientos y sobre la oferta, calidad y uso del recurso hídrico que aprovechan, de acuerdo con los protocolos que para el efecto establezca dicho Instituto.

Artículo 50. *Registro Público de Concesiones y Permisos.* Créase el Registro Público de Concesiones y Permisos de Uso de Agua y de Vertimientos de consulta gratuita, como parte del Sistema de Información, administrado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, de que trata el artículo anterior, e instrumento de información al público y herramienta para la planificación y administración regional del recurso hídrico por parte de las autoridades ambientales competentes, quienes lo establecerán y mantendrán actualizado, bajo su custodia, a nivel regional, con las concesiones y permisos de uso y de vertimientos otorgados en su jurisdicción, y adicionalmente, información sobre el volumen aproximado determinado a nivel de cada cuenca para atender los usos por ministerio de la ley, los actos administrativos que declaren las reservas o el agotamiento de las fuentes hídricas, y los permisos de exploración de aguas subterráneas.

Parágrafo 1°. Corresponde al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, definir y adoptar, en un término no superior a seis meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el protocolo que deberán seguir las autoridades ambientales competentes para el registro.

Parágrafo 2°. Una vez adoptado el protocolo al que se refiere el parágrafo 1° del presente artículo, las autoridades ambientales competentes deberán implementar dicho registro en un término no superior a 2 años, e inscribir de oficio las concesiones y permisos de vertimientos vigentes.

Parágrafo 3°. Agotado el proceso de que trata el parágrafo 2° del presente artículo, las personas que no aparezcan inscritas en el registro o cuya información no concuerde con los términos del

título mediante el cual le fue otorgada la concesión, permiso para el estudio del recurso hídrico y permiso de vertimiento, dispondrán de un término de hasta un año para solicitar la inscripción o modificación correspondiente. Vencido dicho término, el derecho no será oponible a terceros, mientras no sea registrado.

Artículo 51. *Acreditación de laboratorios.* La información requerida para el monitoreo y seguimiento de que trata este capítulo y para el ejercicio de la autoridad ambiental sobre las características físicas, químicas y bióticas del agua, deberá ser suministrada por laboratorios acreditados por el Instituto de Hidrología, Meteorología e Investigaciones Ambientales, IDEAM, o por un ente acreditador aprobado por el Instituto.

Parágrafo 1°. Dentro del año siguiente a la vigencia de la presente ley, se podrán aceptar resultados de ensayo expedidos por laboratorios en proceso de acreditación, para lo cual deberán estar inscritos ante el IDEAM y haber participado en las pruebas de evaluación del desempeño adelantadas por el Instituto.

Parágrafo 2°. El IDEAM mantendrá actualizado un registro de acceso público con la relación de laboratorios acreditados y en proceso de acreditación.

CAPITULO X

Disposiciones finales

Artículo 52. *Disposiciones transitorias y régimen de transición.*

52.1 Los Decretos 1541 de 1978 y 1594 de 1984 y sus normas modificatorias continuarán en aplicación en cuanto al régimen y procedimiento de otorgamiento de las concesiones y permisos de vertimiento, así como en lo relacionado con los estándares de calidad de vertimientos, mientras el Gobierno Nacional no expida la reglamentación de la presente ley.

52.2 Para los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas cuya elaboración se haya iniciado a la entrada en vigencia de la presente ley se continuará dando aplicación al Decreto 1729 de 2002.

52.3 Las concesiones y permisos de vertimiento existentes a la entrada en vigencia de la presente ley continuarán en vigor hasta la terminación del plazo de otorgamiento de los mismos; para su renovación se dará aplicación a la presente ley.

El reglamento de la presente ley señalará los aspectos en los cuales las concesiones y permisos vigentes deberán ajustarse y fijará los plazos en que deba realizarse dicha adecuación.

52.4 Las autoridades ambientales competentes continuarán dando aplicación a los reglamentos expedidos para fijar las tasas ambientales, mientras se expide la metodología para el cálculo de factores, variables y coeficientes que sirvan para la estimación del valor de las tasas, de conformidad con el artículo 42 de la presente ley.

Artículo 53. *Derogatorias y vigencia.* La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial los artículos 89, 91, 97 y 134 del Decreto 2811 de 1974; los artículos 8°, 10 y 11 de la Ley 9ª de 1979; y el numeral 29 del artículo 5°, el artículo 42 en lo referente al recurso hídrico, el artículo 43 y el artículo 111 de la Ley 99 de 1993.

El presente texto aprobado en Sesión de la Comisión Quinta de la Cámara el día miércoles 15 de junio de 2005.

Gustavo Amado López,
Secretario Comisión Quinta
Cámara de Representantes.

Junio 15 de 2005.

TEXTOS DEFINITIVOS

TEXTO DEFINITIVO AL PROYECTO DE LEY NUMERO 140 DE 2004 CAMARA

Aprobado en segundo debate en sesión plenaria de la honorable Cámara de Representantes el día 7 de junio de 2005, según consta en el Acta número 176, por la cual se declara 7 de julio de los años venideros como el día nacional del microempresario.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. *Objeto.* El presente proyecto busca exaltar la importancia del micro, pequeño y mediano empresario en la economía nacional de nuestro país.

Artículo 2°. Declárese el día 8 marzo de los años venideros, como el día del microempresario colombiano.

Artículo 3°. El Gobierno Nacional, en un término no superior a 6 meses deberá definir una política pública específica en la materia, dirigida a incentivar este sector de la economía.

Artículo 4°. El Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Industria y Comercio como homenaje al microempresario durante este mes, programará actividades de capacitación y promoción de la familia, pequeña y mediana industria colombiana, especialmente, ruedas nacionales e internacionales de negocios y ferias micro empresariales

en el nivel departamental y municipal, para lo cual apropiará los recursos necesarios para tal fin.

Artículo 5°. *Vigencia.* La presente ley rige a partir de su aprobación sanción y publicación.

CAMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARIA GENERAL

Bogotá, D. C., 7 de junio de 2005

En sesión plenaria del día 7 de junio de 2005, fue aprobado en segundo debate el texto definitivo del Proyecto de ley número 140 de 2004 Cámara, *por la cual se declara 7 de julio de los años venideros como el día nacional del microempresario.*

Esto con el fin de que el citado proyecto de ley siga su curso legal y reglamentario y de esta manera dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992.

Lo anterior según consta en el acta de sesión plenaria 176 del 7 de junio de 2005.

Cordialmente,

Hugo Ernesto Zárrate Osorio,
Ponente.

El Secretario General,

Angelino Lizcano Rivera.

ACTAS DE CONCILIACION

ACTA DE CONCILIACIÓN AL PROYECTO DE LEY NUMERO 165 DE 2003 CAMARA, 239 DE 2005 SENADO

por la cual se vincula el núcleo familiar de las madres comunitarias al Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.

Doctor

LUIS HUMBERTO GOMEZ GALLO

Presidente

Honorable Senado de la República

Doctora

ZULEMA JATTIN CORRALES

Presidenta

Honorable Cámara de Representantes

Ref.: Proyecto de ley número 165 de 2003 Cámara, 239 de 2005 Senado, por la cual se vincula el núcleo familiar de las madres comunitarias al Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.

Apreciados Presidentes:

En cumplimiento de la designación que ustedes nos hicieron, y de conformidad con el artículo 161 de la Constitución Política y 186 de la Ley 5ª de 1992, nos permitimos someter a consideración de las plenarios del Senado y la Cámara de Representantes el texto conciliado del proyecto de ley de la referencia, para efectos de lo cual decidimos acoger el texto aprobado por el Senado de la República en la sesión plenaria del 9 de junio de 2005, dejando de esta manera dirimidas las diferencias existentes entre los textos aprobados por cada una de las Corporaciones, por lo que se puede continuar con el respectivo trámite.

Anexamos texto definitivo aprobado en la plenaria del honorable Senado el día 9 de junio de 2005.

Cordialmente,

Angela V. Cogollos, Dieb Maloof Cusé, José María Conde, Senadores de la República; Zulema Jattin Corrales, Alfredo Cuello Baute, Buenaventura León León, Representantes a la Cámara.

TEXTO DEFINITIVO AL PROYECTO DE LEY NUMERO 239 DE 2005 SENADO, 165 DE 2003 CAMARA

Aprobado en sesión plenaria del honorable Senado de la República el día 9 de junio de 2005, por la cual se vincula el núcleo familiar de las madres comunitarias al Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. El artículo 1° de la Ley 509 de 1999 quedará así:

Artículo 1°. Afiliación. Las madres comunitarias del programa de Hogares Comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se afiliarán con su grupo familiar al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se harán acreedoras de todas las prestaciones asistenciales y económicas derivadas del mismo.

Parágrafo 1°. La base de cotización para la liquidación de aportes con destino a la seguridad social por parte de las madres comunitarias así como las prestaciones económicas se hará teniendo en cuenta las sumas que efectivamente reciban las madres comunitarias por concepto de bonificación prevista por los reglamentos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Artículo 2°. El artículo 2° de la Ley 509 de 1999, quedará así:

Artículo 2°. Cotización. Las madres comunitarias cotizarán mensualmente como aporte al Sistema General de Seguridad Social en Salud un valor equivalente al cuatro por ciento (4%) de la suma que

reciben por concepto de bonificación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Parágrafo. Las Organizaciones Administradoras del Programa Hogares de Bienestar recaudarán las sumas citadas, mediante la retención y giro del porcentaje descrito, a la Entidad Promotora de Salud, EPS, escogida por la madre comunitaria, dentro de la oportunidad prevista por la ley para el pago de las cotizaciones.

Artículo 3°. Las tasas de compensación que las madres comunitarias cobran a los padres usuarios serán de su propiedad exclusiva.

Artículo 4°. *Vigencia y derogatorias.* La presente ley rige a partir de su publicación y deroga todas las normas que le sean contrarias.

Angela V. Cogollos, Dieb Maloof, José María Conde R., Zulema Jattin, Alfredo Cuello B., Buenaventura León.

C O N T E N I D O

Gaceta número 377 - Jueves 16 de junio de 2005
CAMARA DE REPRESENTANTES

PONENCIAS

Ponencia para primer debate y texto propuesto al Proyecto de Acto legislativo número 347 de 2005 Cámara, por medio del cual se adiciona el artículo 258 de la Constitución Política de Colombia. 1

Págs.

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Informe de ponencia para segundo debate al Proyecto de ley número 192 de 2004 Cámara, por medio de la cual se autoriza y reglamenta la actividad de la helicultura y se dictan otras disposiciones. | 2 |
| Texto aprobado en primer debate en la Comisión Sexta Constitucional Permanente de la honorable Cámara de Representantes del Proyecto de ley número 342 de 2005 Cámara, por la cual se modifica el artículo 14 de la Ley 115 de 1994. | 4 |
| Informe de ponencia para segundo debate, pliego de modificaciones y texto propuesto al Proyecto de ley número 342 de 2005 Cámara, por la cual se modifica el artículo 14 de la Ley 115 de 1994. | 4 |
| ARTICULADO APROBADOS EN COMISION | |
| Articulado aprobado en sesión de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes Proyecto de ley número 365 de 2005 Cámara, por la cual se establecen medidas para orientar la planificación y administración del recurso hídrico en el territorio nacional. | 6 |
| TEXTO DEFINITIVO | |
| Texto definitivo al Proyecto de ley número 140 de 2004 Cámara, aprobado en segundo debate en sesión plenaria de la honorable Cámara de Representantes el día 7 de junio de 2005, según consta en el Acta número 176, por la cual se declara 7 de julio de los años venideros como el día nacional del microempresario | 15 |
| ACTAS DE CONCILIACION | |
| Acta de conciliación y texto definitivo al Proyecto de ley número 165 de 2003 Cámara, 239 de 2005 senado, por la cual se vincula el núcleo familiar de las madres comunitarias al Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. | 15 |